**CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2024**

**COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
2.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
(Matinal)
(DOCUMENTO DE TRABAJO)**

**VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MITA ALANOCA ISAAC**

-A las 08:08 h, se inicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.-Buenos días señores congresistas, siendo las 8 con 8 minutos, se va pasar lista.

Señor secretario técnico, sírvase pasar asistencia.

EL SECRETARIO TÉCNICO pasa lista:

Buenos días, señores congresistas.

Se va a pasar lista, para la segunda sesión extraordinaria de la comisión de Justicia y Derechos Humanos.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).- Presente.

EL SECRETARIO TÉCNICO.-.- Mita Alanoca, presente.

Cavero Alva(); Acuña Peralta(); Alegría García (); Alva Prieto.

La señora ALVA PRIETO (NA).- Presente.

EL SECRETARIO TÉCNICO.-Alva Prieto, presente.

Amuruz Dulanto (); Arriola Tueros. El congresista Arriola Tueros, presente, a través de la plataforma.

Balcázar Zelada(); Burgos Oliveros (); la congresista Amuruz Dulanto, presente, a través de la plataforma.

El congresista Balcázar Zelada, presente, a través de la plataforma.

Burgos Oliveros(); Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL)..- Cerrón Rojas, presente. Buenos días, señor presidente.

EL señor PRESIDENTE.- Buenos días, señor congresista.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP)..- Presente.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Cutipa Ccama, presente.

Dávila Atanacio.

El señor DÁVILA ATANACIO (BS).- Dávila Atanacio, presente.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Dávila Atanacio, presente.

Echaíz de Núñez Izaga(); Gonza Castillo.

El señor GONZA CASTILLO (PL)..- Presente.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Gonza Castillo, presente.

La congresista Jáuregui Martínez de Aguayo, presente, a través de la plataforma.

Jiménez Heredia. El congresista Jiménez Heredia, presente a través de la plataforma.

Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP)..- Morante, presente.

EL SECRETARIO TÉCNICO.-Morante Figari, presente.

Moyano Delgado (); Muñante Barrios(); Palacios Huamán. Palacios Huamán, presente, a través de la plataforma.

Paredes Gonzales(); la congresista Ramírez García, presente, a través de la plataforma.

Tacuri Valdivia.

El señor TACURI VALDIVIA (BM)..- Tacuri Valdivia, presente.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Tacuri Valdivia, presente.

Valer Pinto (); Ventura Ángel. El congresista Valer Pinto, presente, a través de la plataforma.

Ventura Ángel().

Presidente, tenemos 16 congresistas presentes, contamos con el *quorum* para iniciar la sesión.

El señor PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor secretario técnico. Contando con el *quorum* reglamentario, se inicia la Segunda Sesión Extraordinaria, semi presencial de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la agenda documentada que se ha entregado oportunamente.

Se deja constancia que se encuentran con licencias los siguientes señores congresistas, Silvia Monteza Facho, Francis Paredes Castro.

Bien, pasamos al orden del día.

ORDEN DEL DIA

El señor PRESIDENTE.- El primer punto, señores congresistas...

La señora PALACIOS HUAMÁN (NA).-Señor presidente, disculpe, Palacios Huamán, presente. Buenos días.

El señor PRESIDENTE.- Buenos días, señora congresista.

Considéralo, señor secretario.

Señores congresistas, el primer punto del orden del día lo trataremos en otra sesión, puesto que está aún todavía en una etapa de evaluación.

Entonces pasamos al segundo punto del orden del día.

Debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 4417 y otros que propone la Ley que modifica el nuevo Código Penal, el nuevo Código Procesal Penal Decreto Legislativo 957, para optimizar el garantismo en el proceso penal.

Las iniciativas legislativas han sido presentadas por los congresistas Flores Ancachi, Bellido Ugarte, Bazán Calderón, Soto Palacios, Olivos Martínez, Flores Ancachi, Yarrow Lumbreras, Ugarte Mamani, Alcarraz Agüero, Cerrón Rojas, Burgos Oliveros.

El presente predictamen tiene como objetivo, modificar el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, respondiendo a un análisis técnico sólido, sino también a la necesidad de modernizar y fortalecer el proceso penal, asegurando un acceso más eficiente y equitativo a la justicia.

Con éste predictamen se intenta conseguir varios beneficios tales como:

A. Con la modificación del artículo 1 del título preliminar, se prioriza la presunción de la persona, debido a que casos que sean archivados o sean sobreseguidos*, dichos antecedentes, sean anulados por la autoridad competente.

B. Con la modificación del artículo 80 del Código Procesal Penal, se intenta fortalecer el servicio de defensa penal pública, protegiendo el derecho a una defensa adecuada y evitando situaciones de desprotección legal de la persona.

C. Con la modificación del artículo 268 del Código Procesal Penal, por recomendación del informe 0091-2024 elaborado por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se trata de

perfeccionar los presupuestos de la prisión preventiva con el objetivo de ejercerla como de última ratio, para aquellos delitos de baja incidencia.

D. Con la modificación del artículo 271, se eleva el plazo para solicitar prisión preventiva de 48 a 72 horas, con el fin de evitar el vencimiento de plazos o las excesivas solicitudes de reprogramación de las primeras sesiones de prisión preventiva.

Es así que, pidiendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial dan viabilidad dicha propuesta.

E. Con la modificación del artículo 303, se establece en primacía de la presunción de inocencia que el embargo se ejecute únicamente tras una sentencia condenatoria firme, requiriendo que el fiscal o el acto civil soliciten al juez competente la medida de embargo, con una justificación detallada.

Una vez dictada una sentencia condenatoria firme, el embargo procede sin necesidad de contracautela, ni justificación adicional.

Asimismo, con el artículo 306, se dispone que, en caso de sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento, resolución equivalente, o prescripción, todas las medidas de embargo caducarán en un plazo de 5 días, se ordenará la devolución o la entrega del dinero, de fianzas o de cualquier otro bien. Debiendo incluir sus respectivos intereses legales, o la cuantificación de la depreciación o de los daños ocasionados producto del embargo.

F. Con la incorporación del artículo 268-B, sobre la prisión preventiva por peligro a la comunidad, busca implementar medidas efectivas para disminuir la criminalidad y la tasa de mortalidad en las calles, ordenándose la prisión preventiva en contra del imputado por la comisión de los delitos de sicariato, robo, extorsión, secuestro, explotación sexual, trata de personas y terrorismo cuando exista notoria flagrancia en su comisión o existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente su comisión por parte del imputado y este represente un peligro para la seguridad de la comunidad.

Esta medida no es nueva, se viene aplicando en diversos países bajo normativa comparada como lo son del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, el Código Procesal Penal Federal de Argentina, el Código de Procedimiento Penal de Costa Rica, el Código Procesal Penal de Salvador, el Código Nacional de Procedimiento Penal de México y el Código Procesal Penal de Panamá.

G. Con la incorporación del artículo 352A-A, se pretende que el fiscal podrá solicitar el retiro de la acusación en esta etapa cuando considere necesario abdicar de su pretensión.

Asimismo, como señala el Ministerio Público en su opinión, que le da viabilidad que el retiro de la acusación fiscal, viene a

constituir un mecanismo procesal que se encuentra orientado a evitar que prosiga el juicio oral en contra de determinado procesado. Cuando se manifiesta la posibilidad que no se podrá tener por probado los hechos investigados. Y habiendo concluido la presentación del dictamen, si algún congresista quiere intervenir, señores congresistas, tiene el uso de la palabra.

La señora JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO (RP).—Presidente, le pido la palabra. Soy la congresista Milagros Jauregui de Aguayo.

El señor PRESIDENTE.— Le damos el uso de la palabra a la congresista Jáuregui.

La señora JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO (RP).— Muchísimas gracias, señor presidente.

Señor presidente, éste dictamen acumula 16 proyectos de ley, pero no recoge las propuestas planteadas por alguno de sus autores. Tal es el caso del Proyecto de Ley 7692 de mi colega Norma Yarrow, que plantea procedimientos para los casos de flagrancia. Sin embargo, eso no ha sido considerado.

Por otra parte, el texto sustitutorio que hoy nos presentan modifica el artículo 268 del nuevo Código Penal Procesal, el cual dispone actualmente de procesos de una prisión preventiva cuando existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito.

Esta redacción busca ser cambiada **(2)** por otra más que señala que el componente fáctico de la imputación tenga plena correspondencia en la calificación jurídica del caso sustentándose todos los elementos del tipo penal invocado. Con ello, prácticamente se pide una sentencia anticipada para dictar prisión preventiva, lo cual favorecería a los presuntos delincuentes.

Por lo expuesto, señor presidente, considero importante que éste tema sea analizado más profundamente y plantee una cuestión previa, para que retorne a comisión y se agregue las propuestas de los proyectos no recogidos y se elimine este tipo de redacción que es peligrosa para nuestra sociedad.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Bien, gracias señora congresista.

Y si hubiera otra participación.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presidente, la palabra.

El señor PRESIDENTE.— Le damos el uso de la palabra a la señora congresista Moyano.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidente.

En la misma lógica de la congresista Jáuregui, no ha recogido la propuesta de nuestra congresista Olivos, en el tema de la flagrancia.

Sin embargo, debemos señalar algo muy, muy importante que este proyecto está recogiendo de manera negativa, pienso yo, señor presidente, porque no podemos decir con una ley que todos los bienes que deben ser incautados, cuando una persona ha sido imputada, solamente podrían serlo cuando tenga una sentencia. No, porque justamente, señor presidente, todos los embargos tienen que ver con un acto de prevención respecto de las víctimas que podrían, que resultan ser víctimas de un acto delictivo, porque tenía que vérselo en la reparación civil. La reparación civil es eso, señor presidente. Y el dictamen nos está diciendo que, ok, vamos a sentenciar, primero vamos a iniciar el proceso una persona y sólo si cuando sea sentenciada se le embarga. Y qué pasa en el proceso. Alguien puede entonces destinar estas propiedades, nuestros bienes, destinarlos a otro lugar y no habrá posibilidad de que las víctimas pudieran tener un acto de reparación, señor presidente.

Por lo tanto, yo concuerdo con lo que dice la congresista Jáuregui, o retorne nuevamente a la asesoría para que revisen todos los proyectos de ley que han sido presentados y que más bien, señor presidente, vayamos a elaborar un dictamen que respalde también a las víctimas y no a los supuestos actos criminales o delincuentes.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Bien, muchas gracias.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Presidente, la palabra.

El señor PRESIDENTE.— Señor congresista Morante, le damos el uso de palabra al señor congresista Morante.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Señor presidente, lo que acaba de señalar la congresista Moyano es totalmente cierto.

El tema de los embargos está dentro de lo que se conoce cómo medidas cautelares y las medidas cautelares tienen como objeto en un proceso tanto civil como penal o laboral o incluso contencioso administrativo o constitucional es garantizar la ejecución de la sentencia o la reparación civil. Por eso se llaman medidas cautelares que se llevan durante un proceso, es decir, se dictan durante el desarrollo del proceso, no después de la sentencia.

Que después de la sentencia, que es más en el proceso civil incluso existe, la capacidad de poder, digamos, tener una medida cautelar que ya no necesite mayor análisis, o sea, una medida cautelar que es emitida con mayor celeridad frente a una

sentencia, eso también es verdad, pero en el proceso en sí, antes de la sentencia, se puede llevar a cabo una medida cautelar. Incluso en el proceso civil existe lo que se llama medida cautelar fuera de proceso, donde se puede trabar embargo, sin que ni siquiera se haya iniciado el proceso judicial para garantizar una futura ejecución de sentencia, lo que incluso te obliga a presentar la demanda dentro de un plazo de haber sido otorgada la medida cautelar.

O sea, en realidad, presidente, la posibilidad de pretender que los embargos o que las medidas cautelares se dicten después de una sentencia penal es un absurdo, pero total, está totalmente fuera de la determinación de lo que vienen a ser las medidas cautelares y las medidas provisionales. Y ¡ojo!, una de las garantías de la medida cautelar es que puede ser variable, es decir, si durante el proceso se acredita con medio probatorio idóneo que aquello que se está pretendiendo cautelar en realidad no corresponde, la medida cautelar puede ser variada.

Entonces, señor presidente, esto de aquí sí no tiene ningún sentido y es algo absolutamente ilógico. Entonces, presidente, yo creo, yo no sé cómo ha podido pasar esto, pero honestamente esto debería de volver a la comisión para mayor análisis y también que deberían de ser recogidos los otros proyectos. Entonces, yo creo que sí lo que ha planteado la congresista Jáuregui, en el sentido de una cuestión previa para que retorne a comisión es totalmente válido.

El señor PRESIDENTE.—Muchas gracias, señor congresista.

Atendiendo a los pedidos de los señores congresistas, pasamos el tema al cuarto intermedio para mayor análisis.

Pasamos al siguiente punto, al tercer punto del orden del día.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Perdón, presidente, perdón, discúlpeme usted que interrumpa así. Usted tiene que someter a votación el pedido de la congresista Jáuregui. Ella ha pedido una cuestión previa. Usted tiene que someterlo.

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, señora congresista. Vamos a someterlo a voto.

Señor secretario, por favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.— Se va a poner al voto la cuestión previa planteada por la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo, para que el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 4417 y otros, retornen a la comisión, para mayor estudio.

Congresista Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— A favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.— Mita Alanoca, a favor.

Congresista Cavero Alva (); congresista Acuña Peralta (); congresista Alegría García (); congresista Alva Prieto

La señora ALVA PRIETO (NA).- A favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Alva Prieto, a favor.

Congresista Amuruz Dulanto. Amuruz Dulanto, a favor, a través de la plataforma.

Congresista Arriola Tueros (); congresista Balcázar Zelada.

El señor Balcázar Zelada (PL).- Balcázar, a favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Balcázar Zelada, a favor.

Congresista Burgos Oliveros (); el congresista Arriola Tueros, a través de la plataforma, a favor.

Congresista Burgos Oliveros(); congresista Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).- Cerrón Rojas, a favor.

Congresista Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).- En contra.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Congresista Cutipa Ccama, en contra.

La congresista Acuña Peralta, a través de la plataforma, a favor.

Congresista Dávila Atanacio.

El señor DÁVILA ATANACIO (BS).- Dávila, en contra.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Dávila Atanacio, en contra.

Echaíz de Núñez Izaga(); congresista Gonza Castillo.

El señor GONZA CASTILLO (PL).- A favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Congresista Gonza Castillo, a favor.

Congresista Jáuregui Martínez Aguayo.

La señora JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO (RP).- A favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Jáuregui Martínez de Aguayo, a favor.

Y el congresista Jiménez Heredia, a través de la plataforma, a favor.

Congresista Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP).- Morante Figari, a favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Morante Figari, a favor.

Congresista Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).- A favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Moyano Delgado, a favor.

Congresista Muñante Barrios(); congresista Palacios Huamán.

La señora PALACIOS HUAMÁN (NA).- A favor.

EL SECRETARIO TÉCNICO.- Palacios Huamán, a favor.

El congresista Paredes Gonzales, a favor, a través de la plataforma.

Congresista Ramírez García. La congresista Ramírez García, a favor, también a través de la plataforma.

De igual forma, el congresista Tacuri Valdivia, a favor, a través de la plataforma.

Lo mismo que el congresista Valer Pinto, a favor, a través de la plataforma.

Por último, el congresista Ventura Ángel.

Presidente, el resultado de la votación es 17 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones.

Se ha aprobado la cuestión previa.

El señor PRESIDENTE.- Gracias, señor secretario.

Pasamos al tercer punto del orden del día.

Debate Y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 9136 y otros, que propone la Ley que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal, Decreto Legislativo 635, respecto a la activación ilegal de líneas de servicios móviles y a la posesión ilegal de *SIM Card*.

Los autores de la iniciativa legislativa son los congresistas Barbarán Reyes, Soto Reyes y Alva Prieto.

Para nadie es una novedad que nuestro sistema de justicia actualmente presenta grandes falencias, por lo que, con el presente predictamen, se propiciará que funcione de manera más idónea y efectiva, generando una nueva, disposición legal, sobre posición y uso para fines delictivos de los *SIM Card*, por el cual contribuiremos con la lucha contra la inseguridad ciudadana, mejorando nuestros marcos legales e incluso superando los grandes vacíos normativos que se encuentran a la fecha, como proporcionar y facilitar el acceso a través de herramientas informáticas del Osiptel, respecto a toda información sobre la comercialización, contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones donde se identifique el personal que interviene para que sea entregada al Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y de demás entidades que lo requieran, a fin de un estricto cumplimiento de nuestro sistema de justicia.

Es decir, se incrementará la protección efectiva de la comunidad, sobre todo de aquellas personas cuyas identidades se suplantan para activación ilegal del *SIM Cards*, así como aquellas que se

encuentran expuestas a las amenazas y extorsiones, vía el uso de teléfonos móviles.

Dicha protección para el caso de los agraviados con la suplantación de identidad se materializa con el pago de la reparación civil, que en la actualidad se debe realizar en favor del operador del servicio de telecomunicaciones al cual pertenece el *SIM Card* en lugar de resarcir al verdadero sujeto pasivo perjudicado con la acción delictiva.

Esto es la persona a quien le han suplantado su identidad. Asimismo se mejora la calidad de la legislación penal y se le dota de eficiencia como herramienta de persuasión y sanción efectiva en la lucha contra la criminalidad que se vale de las tecnologías, de la información para perpetrar sus delitos.

En consecuencia, es imperante una respuesta firme y decidida que permita promover una justicia más estricta que nos permita combatir con rigurosidad la delincuencia.

Para lo que debe incorporarse el artículo 9-A, a la Ley 30096, modificarse el artículo 222-B e incorporarse **(3)** el artículo 272-A al Código Penal, además de modificar el artículo 16 de la ley 27336.

Se ha atendido las recomendaciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones Osiptel, a fin de que se facilite el acceso de información a través de herramientas informáticas del Osiptel para que el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y demás entidades puedan perseguir el delito bajo el principio de celeridad.

Habiendo concluido la presentación del predictamen, si algún congresista quiere intervenir, tienen el uso de la palabra, señores congresistas.

La señora ALVA PRIETO (NA).— Señor presidente, por favor, quisiera intervenir. He pedido la palabra.

El señor PRESIDENTE.— Le damos el uso de la palabra a la señora congresista María Alva Prieto. Bienvenida, señora congresista, tiene el uso de la palabra.

La señora ALVA PRIETO (NA).— Maricarmen, señor presidente. Maricarmen.

El señor PRESIDENTE.— Perdón, Maricarmen.

La señora ALVA PRIETO (NA).— Señor presidente y colegas congresistas, disculpen que estoy un poco ronca. El predictamen que hoy debatimos ha recogido mi Proyecto de Ley 9656, el cual es crucial para reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la integridad de nuestras telecomunicaciones. En un contexto donde la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para la vida cotidiana, también hemos sido testigos de su uso

indebido en actividades ilícitas como el fraude, la extorsión y la suplantación de identidad.

Según Osiptel, en el 2021 se registraron 730 denuncias relacionadas con la reposición fraudulenta de tarjetas, cambios de titularidad no solicitados y contrataciones ilícitas de servicio. Además, en el 2023 más de siete mil personas descubrieron líneas móviles registradas a su nombre sin su consentimiento.

Estas prácticas afectan no solo a los ciudadanos, sino también a la estabilidad de nuestro sistema de telecomunicaciones.

A través de la fórmula legal propuesta por el predictamen, se modifica y fortalece el Código Penal para abordar directamente la práctica ilegal de la activación de tarjetas SIM sin consentimiento del titular.

Dentro de los beneficios que traería la aprobación de esta iniciativa legislativa se encuentran los siguiente:

Fortalecer la seguridad ciudadana al reducir el uso de tarjetas SIM irregulares previniendo fraudes y delitos asociados. Proteger los datos personales de los usuarios garantizando su tranquilidad frente a estas vulnerabilidades. Exigir un mayor control a las operadoras obligándolas a verificar rigurosamente los datos de sus clientes. Asimismo, impactar positivamente en la economía del sector al reducir las pérdidas millonarias ocasionadas por estas prácticas ilícitas.

Este proyecto de ley, señor presidente, es una respuesta contundente a las amenazas que enfrentamos; no solo combate, las actividades ilegales, sino que también refuerza la confianza de los ciudadanos en el sistema de telecomunicación. Un pilar indispensable para el desarrollo social y económico de nuestro país.

En este sentido, colegas, señor presidente, le solicito respaldar esta propuesta; juntos podemos garantizar un entorno más seguro y confiable para todos los peruanos.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señora congresista María Alva. Bien, ¿si hay alguna intervención más?

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Presidente, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Señor congresista, le damos el uso de la palabra. Por favor en forma breve.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Sí.

Presidente, ¿hay algún aspecto en el proyecto, en el dictamen que se ha elaborado?

En términos generales estoy de acuerdo, sin embargo, hay un aspecto que creo que sí tiene que ser revisado, que es el siguiente: La modificación del artículo 272-A, numeral 2, establece que la responsabilidad penal alcanza también a los representantes legales de las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Este tema ya lo vimos incluso en anteriores periodos parlamentarios, donde justamente se trató temas similares a este, una normatividad similar a esta, que evidentemente la responsabilidad penal es de carácter objetivo. Es decir, la responsabilidad penal no puede ser de carácter subsidiario, es decir, por defecto no podemos atribuir una responsabilidad penal a alguien. Tiene que haber una acción directa que los sindique dentro de la comisión de un ilícito penal. Por lo tanto, no hay una responsabilidad penal solidaria.

En ese aspecto, señor presidente, por ejemplo, las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones venden sus servicios, venden sus productos, y en esto, por ejemplo, hay concesionarios. El gerente o el representante legal de cualquiera de estas empresas telefónicas, llámese la que se llame, y puede ser Bitel, Entel, Claro, Movistar, lo que sea, no puede ser el gerente o el representante legal no puede ser responsable penal por lo que algún concesionario de forma irresponsable pueda salir a la calle a vender chips o vender SIM cards sin cumplir con las estipulaciones legales, la responsabilidad es directa de quien comete el delito. No hay una responsabilidad penal, digamos, de carácter solidario en este aspecto.

Por eso, señor presidente, creo que el numeral 2 del artículo 172-A la verdad estaría, digamos, vulnerando todo tipo de principios de responsabilidad penal. En su defecto, podría haber algún tipo de responsabilidad civil, puede ser, pero eso también hay que acreditarlo en el sentido de que haya hecho algo en particular que haya generado el daño en la vía civil, pero la responsabilidad penal no se atribuye de esta manera, la responsabilidad penal es personalísima.

Entonces, en ese aspecto, señor presidente, yo sugiero que esto se retire del dictamen, porque de lo contrario, estaríamos incumpliendo todo tipo de principio y doctrina penal vinculada a nuestra legislación, atribuyendo una responsabilidad penal por carácter solidario y eso está totalmente prohibido por nuestra legislación y por nuestra propia Constitución.

En ese aspecto, señor presidente, yo le solicitaría que se retire ese numeral 2 del artículo 172-A.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señor congresista.

Sin embargo, al respecto debo decir que ese artículo se debe a que el sector empresarial debe ser responsable; no es cuestión de vender por vender sin tener el debido cuidado, y esto está sumando al problema de extorsiones.

Con esta aclaración, señor congresista, en todo caso recogemos las propuestas, y en todo caso continuamos con el debate.

Si algún congresista más...

El señor Balcázar Zelada (PL).— La palabra. La palabra.

El señor Morante Figari (SP).— Presidente.

El señor Balcázar Zelada (PL).— La palabra.

El señor Presidente.— A ver, le damos el uso de la palabra al señor congresista Balcázar; por favor, en forma muy breve.

El señor Balcázar Zelada (PL).— Muchas gracias, presidente.

Yo creo que este asunto merece un mejor estudio porque considero que los delitos informáticos requieren especialistas para poder emitir un buen dictamen a la comisión. Los técnicos no son expertos en todos los temas que llegan a la comisión. Por ejemplo, estos son métodos modernos que tenemos que ir despacio. Yo creo que falta ahí un estudio.

Efectivamente, como decía los colegas anteriores, no sé de dónde han sacado la tesis de que la persona jurídica, en este caso tiene que ser también imputable penalmente. La imputación es personal. La persona jurídica es una entelequia como sabemos nosotros. Es una ficción jurídica en el mundo civil. Se creó para el campo civil, de tal manera que esa ficción jurídica no puede trabajarse si no los que verdaderamente tiene una responsabilidad directa en la comisión de delito que actúe con conciencia, con voluntad y voluntad no tiene una persona jurídica, pues. Eso, por un lado.

Segundo lugar, la persona jurídica en determinados delitos que son generalmente culposos, ahí entra la persona jurídica como tercero civil responsable que debe ser emplazado en el proceso para los efectos de poder hacerle alcanzable la reparación civil que se pueda presentar.

De tal manera que yo creo que allí hay una suerte de incoherencia en el dictamen y a mí me parece que debe irse a un cuarto intermedio porque ahí tenemos que aportar. Como tengo que aportar, por ejemplo, en el caso anterior que se ha discutido donde también necesitamos hacer precisiones; tampoco se puede hablar de asuntos penales, es decir, conocer y no tener experiencia sobre la materia.

Entonces, en ese sentido, agradezco mucho por la oportunidad que se me brinda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor congresista Balcázar.

Al respecto, debo decir de que este tema ha sido consultado a la empresa de telecomunicaciones, al organismo supervisor Osiptel, sin embargo, ellos han aceptado de que la redacción es correcta.

Por lo tanto...

Bueno, señores congresistas, ¿si alguien más que pueda opinar?

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Presidente, presidente; Morante.

Quisiera plantear una cuestión previa para que este tema retorne a comisión, porque evidentemente, por ejemplo, acá no tenemos tampoco ningún informe del Ministerio de Justicia, y ya hemos visto lo que acaba de pasar con respecto a una norma que elimina la detención preliminar y que ha sido pasada por agua tibia y evidentemente se está generando problemas.

Esto también puede ser una situación similar, de alguna manera se tendría que también pedir opinión y exigirle el pronunciamiento también del Ministerio de Justicia porque aquí claramente se están vulnerando principios y doctrina de carácter penal tal como lo acaba de señalar el congresista Balcázar, que reconoce también y establece al igual que yo, que aquí se están atribuyendo responsabilidades penales de carácter subsidiario, cuando la responsabilidad penal es personalísima.

Señor presidente, solicito cuestión previa para que esto retorne a comisión.

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, vamos a someterlo a votación.

Señor secretario técnico, por favor, para la cuestión previa.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Se va a poner al voto la cuestión previa planteada por el congresista Morante Figari, para que el predictamen recaído en los proyectos de ley 9136 y otros regresen a la comisión.

Congresista Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— En contra.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Mita Alanoca, en contra.

Cavero Alva (); Paredes Castro (); Acuña Peralta (); Alva Prieto (); Alegría García (); Amuruz Dulanto (); Arriola Tueros (); Balcázar Zelada (); Burgos Oliveros (); Cerrón Rojas (); **(4)** Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Abstención.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Cutipa Ccama, abstención.

El señor Balcázar Zelada (PL).— Balcázar, a favor.

El Secretario Técnico.— Balcázar Zelada, a favor.

Burgos Oliveros a través de la plataforma, abstención.

Dávila Atanacio.

La congresista Acuña Peralta a través de la plataforma, a favor.

Dávila Atanacio.

La señora Moyano Delgado (FP).— Moyano, en contra.

El Secretario Técnico.— Moyano Delgado, en contra.

Echaíz de Núñez Izaga.

El congresista Arriola Tueros, a través de la plataforma, abstención.

Gonza Castillo.

El señor Gonza Castillo (PL).— A favor.

El Secretario Técnico.— Jáuregui Martínez de Aguayo.

La señora Jáuregui Martínez de Aguayo (RP).— En contra.

El Secretario Técnico.— Jáuregui Martínez de Aguayo, en contra.

Morante Figari.

La señora Alva Prieto (NA).— Presidente, Alva Prieto, en contra.
Presidente, Alva Prieto, en contra.

El Secretario Técnico.— Alva Prieto, en contra.

El señor Cerrón Rojas (PL).— Cerrón Rojas, en contra, por favor.

El Secretario Técnico.— Alva Prieto, en contra.

El congresista Cerrón Rojas, en contra. Y la congresista Amuruz Dulanto a través de la plataforma, en contra.

Morante Figari.

El señor Morante Figari (SP).— A favor.

El Secretario Técnico.— Morante Figari, a favor.

Muñante Barrios (); Palacios Huamán.

La señora Palacios Huamán (NA).— A favor.

El Secretario Técnico.— Palacios Huamán, a favor.

Paredes Gonzáles.

El señor Paredes Gonzales (BM).— Buen día, en contra.

El Secretario Técnico.— En contra. Paredes Gonzáles, en contra.

La congresista Ramírez García, en contra a través de la plataforma.

El congresista Tacuri Valdivia, a favor a través de la plataforma.

Valer Pinto (); Ventura Ángel.

El congresista Dávila Atanacio a través de la plataforma, en contra.

El resultado de la votación es 6 votos a favor, 10 votos en contra, y tres abstenciones.

No ha sido aprobada la...

El congresista Valer Pinto, está votando a través de la plataforma en abstención; serían cuatro abstenciones.

No ha sido aprobada la cuestión previa.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor secretario técnico.

Señor secretario, vayamos al voto.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Se va a consultar la votación del dictamen contenido en los proyectos de ley 9636 y otros.

Congresista Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— A favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Mita Alanoca, a favor.

Congresista Cavero Alva (); congresista Acuña Peralta (); congresista Alegría García (); congresista Alva Prieto.

La señora ALVA PRIETO (NA).— A favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Alva Prieto, a favor.

Congresista Amuruz Dulanto (); congresista Arriola Tueros.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Moyano, a favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— No se escuchó...

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Balcázar, en contra.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Balcázar Zelada, en contra.

La congresistas Moyano Delgado, ha emitido su voto, pero no se le ha escuchado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Moyano.

El SECRETARIO TÉCNICO.— No se le ha escuchado, congresista Moyano. Si nos puede consignar su voto a través del chat, por favor.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Moyano, a favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Moyano Delgado, a favor.

El señor BURGOS OLIVEROS (PP).— Burgos Oliveros, a favor a través de la plataforma.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Cutipa, en abstención.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Cutipa Ccama, en abstención.

El congresista Arriola Tueros, a favor a través de la plataforma.

Dávila Atanacio. El congresista Dávila Atanacio, a favor a través de la plataforma.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante, en contra.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Morante Figari, en contra.

Echaíz de Núñez Izaga (); Gonza Castillo (); Jáuregui Martínez de Aguayo.

La señora JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO (RP).— A favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Jáuregui Martínez de Aguayo, a favor.

El congresista Jiménez Heredia, a favor a través de la plataforma.

Muñante Barrios.

La congresista Palacios Huamán, en abstención a través de la plataforma.

Paredes Gonzáles.

El señor PAREDES GONZALES (BM).— A favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Paredes Gonzáles, a favor.

Ramírez García.

La señora RAMÍREZ GARCÍA (FP).— Congresista Ramírez, a favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Ramírez García, a favor.

El congresista Tacuri Valdivia, en contra a través de la plataforma.

Valer Pinto.

La congresista Amuruz Dulanto, en abstención a través de la plataforma.

El congresista Valer Pinto, en abstención también a través de la plataforma.

Ventura Ángel (); congresista Acuña Peralta (); congresista Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Cerrón Rojas, a favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Congresista Cerrón Rojas, a favor.

La congresista Acuña Peralta, abstención a través de la plataforma.

Congresista Gonza Castillo.

El señor GONZA CASTILLO (PL).— A favor.

El SECRETARIO TÉCNICO.— Gonza Castillo, a favor.

Presidente, el resultado de la votación es 12 congresistas a favor, 3 en contra, y 5 abstenciones.

Ha sido aprobado por mayoría el dictamen.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor secretario técnico.

En consecuencia, ha sido aprobado por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 9136 y otros.

Los puntos cuarto, quinto, sexto, séptimo, y octavo, se pasará en otra sesión.

Y pasamos al noveno punto de Orden del Día, la sustentación del proyecto de ley presentados y decretados a la comisión.

Exposición del congresista Alex Parades Gonzáles, quien sustentará su Proyecto de Ley 9620/2024-CR de su autoría, que propone incorporar a los enamorados y exenamorados como sujetos de protección en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y a los integrantes del grupo familiar.

Tiene la palabra el señor congresista, por cinco minutos.

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Gracias, presidente; dejando constancia sin alusión a ningún presente, por si acaso.

El artículo 1 planteamos como objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto incorporar a los enamorados y exenamorados como sujetos de protección en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 2. Finalidad de la ley. La finalidad de esta ley es ampliar el ámbito de protección previsto en la Ley 30364, extendiéndolo a relaciones sentimentales no cohabitantes, a fin de prevenir y sancionar la violencia que puede ejercerse en tales relaciones, contribuyendo así a la protección integral de las personas afectadas por violencia en el contexto de relaciones sentimentales.

Artículo 1. Proponemos la modificación del inciso b) del artículo 7 de la Ley 30364 en los siguientes extremos: Modifíquese el artículo 7 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto y alcances de la ley.

Literal b). Los miembros del grupo familiar entiéndase como tales la pareja sentimental como son cónyuges, convivientes y enamorados, así como a los excónyuges, exconvivientes y exenamorados, padrastros, madrastas o quienes tengan hijas o hijos en común, las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no mellen relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia.

Exposición de motivos.

La Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tienen como objetivo prevenir, erradicar y sancionar cualquier forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en contextos tanto públicos como privados; no obstante, la definición de miembros del grupo familiar establecía en el artículo 7 de la ley no contempla explícitamente a los enamorados y los exenamorados. Esta exclusión deja un segmento significativo de la población desprotegida, lo que plantea la necesidad de una enmienda legislativa para abordar esta deficiencia.

Es crucial reconocer que la dinámica de violencia puede surgir en relaciones de pareja que no han sido formalizadas mediante el matrimonio o la convivencia. En este sentido, las relaciones de enamoramiento y aquellas que han terminado pueden estar marcadas por desigualdades de poder, dependencia emocional y conflicto, haciendo que sus integrantes sean igualmente vulnerables. **(5)**

Estas dinámicas exigen la intervención del Estado para garantizar la protección de las víctimas en todas las etapas de una relación afectiva.

Extender la protección de esta ley permitirá prevenir, sancionar y erradicar la violencia de manera más integral, sin importar la formalidad de la relación.

El fenómeno de la violencia se presenta tanto a nivel de pareja en fase de enamoramiento como de núcleo familiar.

Las estadísticas de violencia contra la mujer y el maltrato a las niñas y niños dan cuenta de la importancia del tema, y de la necesidad del mejoramiento de las políticas sociales de promoción y protección de la mujer y de la familia.

Un estudio del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, realizado en Lima revela que el 61.3 % de mujeres casadas o convivientes han sufrido algún tipo de trato inadecuado durante el enamoramiento, gritos, infidelidad, indiferencia, arranque de violencia, maltrato físico, celos excesivos, mientras que este porcentaje se incrementa el 80.5 %

en las mujeres que actualmente sufren algún tipo de maltrato sistemático, agresión física o sexual, maltrato psicológico y abandono por lo menos una o dos veces al mes.

El citado estudio revela que el 18.2 % de mujeres actualmente casadas o convivientes fue víctima de algún tipo de violencia durante la etapa del enamorado con su pareja actual, y que en el caso de las mujeres que hoy son sistemáticamente maltratadas este antecedente se eleva al 39.5 %.

Fundamentación.

Al incluir a los enamorados y exenamorados como sujetos de protección se amplía el alcance de la ley, permitiendo al Estado intervenir y aplicar de medidas de protección oportunas en casos de violencia sentimental no formal, por así llamar a la relación de enamoramiento.

Debemos recordar que la Constitución Política del Perú establece en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado.

Ahora bien, en este sentido cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad de las personas y, por ende, el Estado está obligado a garantizar una protección integral sin incurrir en distinción de la formalidad de las relaciones personales.

La propuesta legislativa a través de la modificatoria a la Ley 30364 contribuirá a una protección más completa y equitativa, siendo menester citar que el artículo 2, inciso 2 de la Constitución prohíbe la discriminación basada en motivos de género, origen, condición económica, entre otros, asegurando el acceso equitativo a los derechos y servicios.

En el caso Dina Roxana Romero del Águila, donde el Tribunal consideró elementos específicos que llevaron a descartar la figura de tentativa de feminicidio en favor de una condena menor por lesiones leves, nos muestran que la relación de pareja fue central en el proceso judicial, aunque no suficiente para mantener la calificación de feminicidio.

La Casación 1177-2019 de Cusco, en este caso, la Corte Suprema cambió la calificación de tentativa de feminicidio a agresión simple, argumentando que no se cumplía con los requisitos para considerar el vínculo como grupo familiar en el contexto del artículo 108-B del Código Penal.

La decisión subrayó que la falta de convivencia y una relación de noviazgo sin elementos de cohabitación, no alcanzan para configurar el contexto de violencia familiar necesario para calificar el delito como feminicidio.

Finalmente, efectos de la vigencia sobre la legislación nacional.

La presente iniciativa legislativa modifica el artículo 7 de la Ley 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Análisis costo beneficio.

El presente proyecto de ley no genera gasto al erario nacional, pues solo está modificando el artículo 7 de la Ley 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Ampliándose a los sujetos de protección conforme a la realidad de nuestra sociedad.

Vinculación con la agenda legislativa.

Este proyecto está alineado con la agenda legislativa para el período anual de sesiones 2023-2024 aprobado con Resolución Legislativa del Congreso de la República 00-2-2023-2024-CR publicado en el diario oficial "El Peruano" el 17 de octubre de 2023.

Objetivo uno, democracia y estado de derecho, Política 7, erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana.

Dicho esto, presidente, solicitamos se proceda conforme al Reglamento en el tratamiento del presente Proyecto de Ley 9620/2024-CR 2020.

Muchas gracias por la oportunidad.

El señor PRESIDENTE.— Gracias a congresista Paredes Gonzales, su exposición nos servirá para preparar el predictamen correspondiente.

En cuanto a la exposición del congresista Víctor Raúl Cutipa, lo pasamos a otra sesión.

No habiendo más asuntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión.

Los señores congresistas que se opongan a la dispensa solicitada, sírvanse expresarlo.

Se da por aprobada la dispensa.

Siendo las 9 con 14 minutos se levanta la sesión.

Muchas gracias por su participación, señores congresistas, tanto acá en forma presencial y en forma virtual.

—A las 9:14 h, se levanta la sesión.